



Moussa Bourekba

Investigador, CIDOB

Un fenómeno europeo con tentáculos nacionales

Este año, el asalto a la revista satírica Charlie Hebdo (del 7 al 9 de enero de 2015), el doble ataque en la capital danesa (14 de febrero de 2014), así como los arrestos de unas veinte personas acusadas de reclutar a «potenciales yihadistas» y planear ataques en Barcelona durante varias operaciones antiterroristas muestran que muchos estados miembros de la UE se hallan expuestos a la amenaza del extremismo violento.

Aunque esta serie de sucesos sacudió a la opinión pública de todo el viejo continente, presionando a los líderes políticos nacionales a reforzar las medidas de seguridad a escala nacional, la amenaza que plantea el extremismo violento debería tratarse a nivel europeo.

Una estrategia europea infrautilizada

De hecho, ese era el objetivo de la Estrategia para Combatir la Radicalización y el Reclutamiento Terrorista de la UE, lanzada en 2005. Articulada en torno a las ideas de prevención (promoción de foros antiextremistas) e interrupción («interrumpir las actividades que llevan a la gente al terrorismo»), esta estrategia también dió a luz a la Red Europea de Expertos en Radicalización, que sirve como plataforma en la que expertos e investigadores discuten sobre las raíces del fenómeno de la radicalización y dotan a los decisores políticos de la UE de su conocimiento experto sobre el tema (intercambio de buenas prácticas, etc.).

Sin embargo, durante la década posterior al lanzamiento de tal estrategia, han aparecido muchos otros desafíos que hacen urgente la necesidad de una estrategia multidimensional y coherente contra el extremismo violento. Según Vera Jouriva, comisaria de Justicia de la UE, se estima que más de 6.000 europeos han partido hacia Siria para nutrir las filas de organizaciones extremistas violentas, tales como el Estado Islámico o Jabhat-Al Nusra.

Como resultado, cada estado miembro ha implementado su propia estrategia de seguridad contra el extremismo violento, cuando la dimensión del fenómeno muestra claramente que los miembros de la UE necesitan cooperar no sólo en el campo de la represión sino también, y sobre todo, en el de la prevención. Ello incluiría aumentar la cooperación en inteligencia, mejorar el intercambio de información entre las fuerzas policiales y los sistemas judiciales de los estados miembros, favorecer un intercambio más amplio de buenas prácticas, así como crear una auténtica institución europea que permita a expertos y profesionales estudiar los diversos motivos por los que la gente opta por el extremismo violento.

Hacia una estrategia preventiva a largo plazo

Además, la vecina región MENA (Oriente Medio y Norte de África), se ha convertido, desde 2011, en el escenario de una explosión de violencia sin precedentes (Libia, Túnez, el Sahel, Siria, Irak), al tiempo que presenta muchos desafíos económicos que son urgentes de abordar. La continuación de la guerra civil en Irak, Siria y Libia con todas sus implicaciones (proliferación de milicias y armas en esos países y sus vecinos), así como la necesidad de reformas estructurales (la región cuenta con la mayor tasa de desempleo juvenil del mundo), siembran, sin duda, las semillas del extremismo violento.

Hay que prestar atención a tal contexto y a sus posibles consecuencias, tanto para muchos de los socios europeos como para la propia UE. Paralelamente a las medidas a corto plazo, y con frecuencia represivas, la UE debería también afrontar la cuestión del extremismo violento a la luz de los factores condicionantes que hacen que tanto ciudadanos europeos como no europeos se vuelvan vulnerables a las ideologías radicales. Esto significa establecer una mayor cooperación con estos países, no solo en el campo de la seguridad, sino también con una perspectiva a largo plazo, mediante el apoyo a reformas estructurales socioeconómicas.